

# EL ESTADO DE LA SOSTENIBILIDAD JURISDICCIONAL: SÍNTESIS PARA IMPLEMENTADORES Y CREADORES DE POLÍTICAS



**Autores** | Claudia Stickler<sup>1</sup>, Amy Duchelle<sup>2</sup>, Juan Pablo Ardila<sup>1</sup>, Daniel Nepstad<sup>1</sup>, Olivia David<sup>1</sup>, Charlotta Chan<sup>1</sup>, Juan Gabriel Rojas<sup>1</sup>, Rafael Vargas<sup>1</sup>, Tathiana Bezerra<sup>1</sup>, Luke Pritchard<sup>3</sup>, Julie Simmonds<sup>3</sup>, Joanna Durbin<sup>4</sup>, Gabriela Simonet<sup>2</sup>, Swetha Peteru<sup>2</sup>, Mella Komalasari<sup>2</sup>, Maria DiGiano<sup>1</sup>, Matt Warren<sup>1</sup>

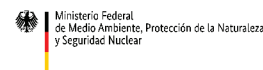
**Contacto** | [cstickler@earthinnovation.org](mailto:cstickler@earthinnovation.org)

<sup>1</sup> Earth Innovation Institute. San Francisco, CA.

<sup>2</sup> Centro para la Investigación Forestal Internacional. Bogor, Indonesia.

<sup>3</sup> Secretaría del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques, Universidad de Colorado - Laboratorio de Innovación de Políticas Energéticas y Ambientales. Boulder, EE. UU.

<sup>4</sup> Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad. Washington, D.C., EE. UU.



en virtud de una resolución del Parlamento de la República Federal de Alemania



Norad



PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE Bosques, Árboles y Agroforestería



## MENSAJES CLAVE

- Las 39 jurisdicciones subnacionales en los 12 países estudiados abarcan el 28% de los bosques tropicales del mundo y varían ampliamente tanto en sus tasas de deforestación como en la superficie de bosque que les queda.
- Casi todas las jurisdicciones (38 de 39) han firmado compromisos formales a escala internacional para frenar la deforestación y/o acelerar la reforestación o la recuperación forestal.
- Muchas están financiando e implementando políticas y programas innovadores, dando prioridad a los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pequeños agricultores como beneficiarios clave de estas intervenciones.
- La deforestación en la mitad de las jurisdicciones (19 de 39) ha disminuido por debajo de los niveles de referencia subnacionales forestales oficiales previstos.
- Estas disminuciones en la deforestación representan aproximadamente 6,8 GtCO<sub>2</sub>e de emisiones de carbono evitadas<sup>1</sup>, atribuibles tanto a intervenciones de políticas nacionales y subnacionales como a acciones del sector privado.

## INTRODUCCIÓN

Los bosques tropicales son la principal fuente de sustento, agua y combustible para más de mil millones de personas que viven en regiones tropicales<sup>2</sup>. Desempeñan un papel importante en los ciclos hidrológicos mundiales, incluido el enfriamiento de la atmósfera. Actualmente, la deforestación, la degradación de los bosques y las emisiones de las turberas también son responsables de aproximadamente un 15% de las emisiones globales de GEI en la atmósfera<sup>3</sup>. Críticamente, en los esfuerzos por reducir las emisiones globales, la absorción de carbono por los bosques tropicales podría compensar una proporción significativa del carbono de los combustibles fósiles que se proyecta liberar hasta 2050<sup>4</sup>. Al estabilizar y reducir la concentración de CO<sub>2</sub> en la atmósfera a corto plazo, la reducción de las emisiones de los bosques tropicales crea un puente hacia un mundo libre de combustibles fósiles, que probablemente demorará más en alcanzarse.

Algunas de las naciones más ricas del mundo han establecido como una prioridad el ayudar a frenar la deforestación y otros cambios de cobertura/uso del suelo que suponen altas emisiones en los trópicos. Colectivamente, Noruega, Alemania y el Reino Unido han contribuido US\$2,9 mil millones para frenar la deforestación y la degradación tropical en las jurisdicciones de nuestro estudio, desde 2008. Los donantes multilaterales también han comprometido US\$1,4 mil millones adicionales (ver Sección 4). Una pregunta clave para estos financiadores, así como para los habitantes de estas regiones y para la sociedad en general, es si sus esfuerzos han contribuido a una disminución de las emisiones en los bosques tropicales y un aumento del bienestar en la región.

Los enfoques jurisdiccionales para el desarrollo sostenible bajo en emisiones tienen un gran potencial para fomentar soluciones integrales y duraderas a los problemas interrelacionados de la deforestación tropical, los medios

de vida rurales y la seguridad alimentaria<sup>5</sup>. Con varios “experimentos” jurisdiccionales en marcha en todo el mundo, ha llegado el momento de una evaluación sistemática. Este informe proporciona una síntesis general de la sostenibilidad jurisdiccional en los trópicos basada en la investigación en 39 jurisdicciones subnacionales que tienen intenciones de implementar una agenda de desarrollo bajo en emisiones (Fig. 1).

De forma específica, evaluamos el progreso en los elementos centrales de la sostenibilidad jurisdiccional, incluyendo políticas e incentivos innovadores, metas claras de desempeño, sistemas de monitoreo transparentes y accesibles, plataformas multiactor e inclusivas de gobernanza, iniciativas agrícolas sostenibles y reconocimiento y respeto por los derechos locales, entre otros. La evaluación también incluye un análisis en profundidad de la deforestación y las emisiones (incluidos los motores y agentes de la deforestación y la degradación forestal) y examina las posibles implicaciones de las estrategias de desarrollo rural bajo en emisiones (DRBE) para futuras reducciones de emisiones. Además, explora las barreras y oportunidades para fomentar la sostenibilidad jurisdiccional. Examinamos las siguientes preguntas:

1. **¿Ha disminuido la deforestación en las jurisdicciones del estudio?**
2. **¿Qué compromisos tienen las jurisdicciones para reducir la deforestación y/o las emisiones y otras metas socioeconómicas y ambientales?**
3. **¿Qué progreso han alcanzado las jurisdicciones respecto al DRBE?**
4. **¿Qué apoyo y/o reconocimiento externo han recibido las jurisdicciones?**
5. **¿Cómo pueden las jurisdicciones continuar avanzando hacia el DRBE en el futuro?**

1 Este cálculo es para emisiones brutas de carbono evitadas, sólo considerando reducciones. Las emisiones netas evitadas, es decir, las reducciones de emisiones menos los incrementos en las emisiones equivalen a 6,39 GtCO<sub>2</sub>e.

2 Seymour, F. and J. Busch. 2016. *Why Forests? Why Now? The Science, Economics, and Politics of Tropical Forests and Climate Change*. Center for Global Development.

3 Van der Werf, et al. 2009. “CO<sub>2</sub> emissions from forest loss.” *Nature Geoscience*.

4 Griscorn, B.W. et al. 2017. “Natural climate solutions.” *PNAS* 114(44): 11645-11650.

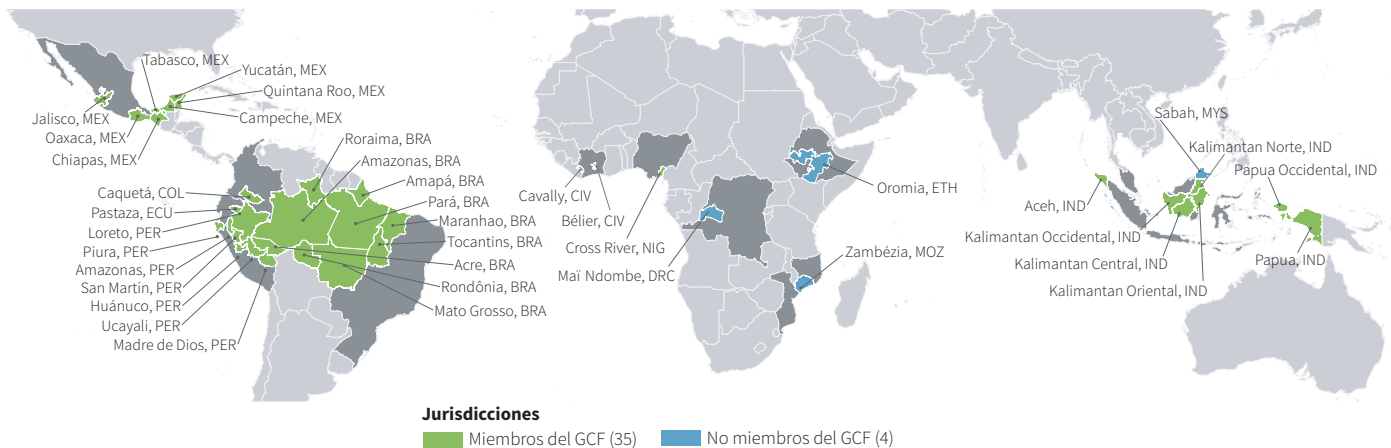
5 D. Nepstad, et al. 2013. “More Food, More Forest, Few Emissions, Better Livelihoods: Linking REDD+, Sustainable Supply Chains and Domestic Policy in Brazil, Indonesia and Colombia.” *Carbon Management* 4 (6): 639–58; W. Boyd, et al. 2018. “Jurisdictional Approaches to REDD+ and Low Emissions Development: Progress and Prospects.” Working Paper. Washington, DC: World Resources Institute. Disponible en línea en [wri.org/ending-tropicaldeforestation](http://wri.org/ending-tropicaldeforestation).

## RECUADRO 1. CONCEPTOS CLAVE

**Sostenibilidad jurisdiccional:** la transición exitosa al desarrollo sostenible, que abarca dimensiones sociales, ambientales y económicas, en toda una geografía política, como un estado, provincia, municipio, condado, distrito o nación. El éxito se mide en todo el territorio de la jurisdicción y, por lo tanto, incluye toda la gama de actividades, sistemas de producción, ecosistemas y actores.

**Enfoque jurisdiccional:** un tipo de gestión integrada del paisaje, con una característica distintiva importante: el paisaje está definido por límites relevantes para las políticas y la estrategia subyacente está diseñada para lograr un alto nivel de participación gubernamental.

**Desarrollo rural bajo en emisiones (DRBE):** un enfoque jurisdiccional de la sostenibilidad, en el que la estabilidad climática es una meta explícita, se centra en las poblaciones rurales y los ejes ambientales y de desarrollo se integran a escala de toda la jurisdicción.



**Figura 1:** Este estudio se centra en 39<sup>6</sup> divisiones administrativas y políticas subnacionales de primer nivel (por ejemplo, provincias, estados) en 12 países tropicales que están desarrollando estrategias de desarrollo rural bajo en emisiones (DRBE). 35 de las jurisdicciones estudiadas son miembros del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF)<sup>7</sup>, una colaboración de 38 estados y provincias que trabajan para promover enfoques jurisdiccionales para REDD+ y desarrollo bajo en emisiones. En 2017-18, recopilamos datos secundarios y realizamos entrevistas con actores clave en todas las jurisdicciones sobre los temas descritos anteriormente. En varias jurisdicciones, también implementamos la Herramienta de Calificación para Paisajes Sostenibles (SLRT) de la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad para complementar nuestra evaluación del avance hacia el DRBE (ver Recuadro 3). Además de esta síntesis, el informe incluye un conjunto de informes analíticos de perfil jurisdiccional de 2 páginas, que proporcionan una descripción contextual de cada jurisdicción, resaltan una política o programa innovador, detallan el progreso alcanzado en los elementos centrales de la sostenibilidad jurisdiccional y resumen los desafíos y oportunidades específicos de la jurisdicción. Una lista completa de las jurisdicciones incluidas en el estudio, el informe y los perfiles y la información detallada sobre los datos y métodos están disponibles en línea en [www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability](http://www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability).

6 El número de jurisdicciones incluidas en este análisis varía entre 33 y 39, dependiendo de la disponibilidad de datos para cada análisis. Informamos el número incluido para cada análisis e indicamos qué jurisdicciones no se incluyeron. La mayoría de los análisis descritos en esta síntesis excluyen Pastaza, Huánuco, Piura, Roraima, Oromia y Papua.

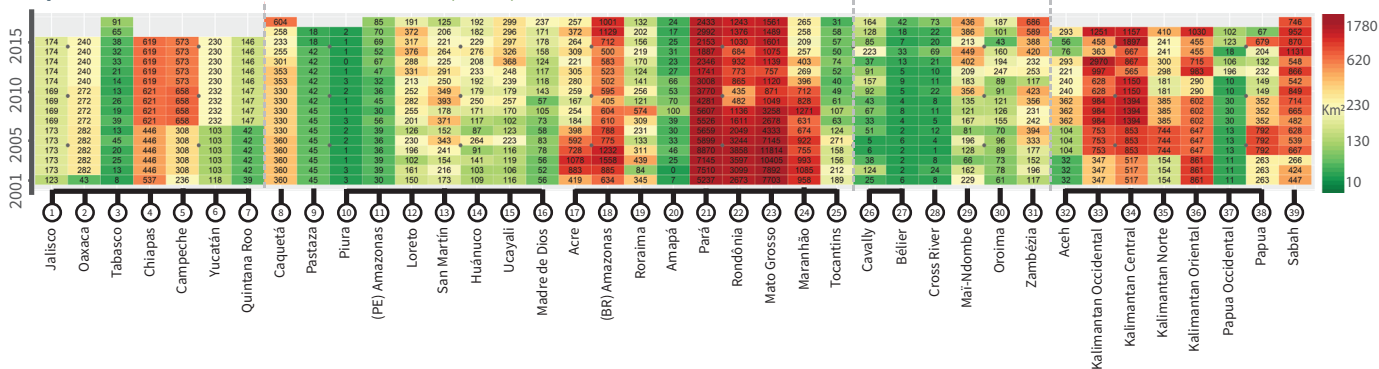
7 Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques: <https://gctf.org/>

# I. TENDENCIAS EN DEFORESTACIÓN Y EMISIONES

## A) Tasa de deforestación anual 2001-2017 (%)



## B) Deforestación anual 2001-2017 (km²)

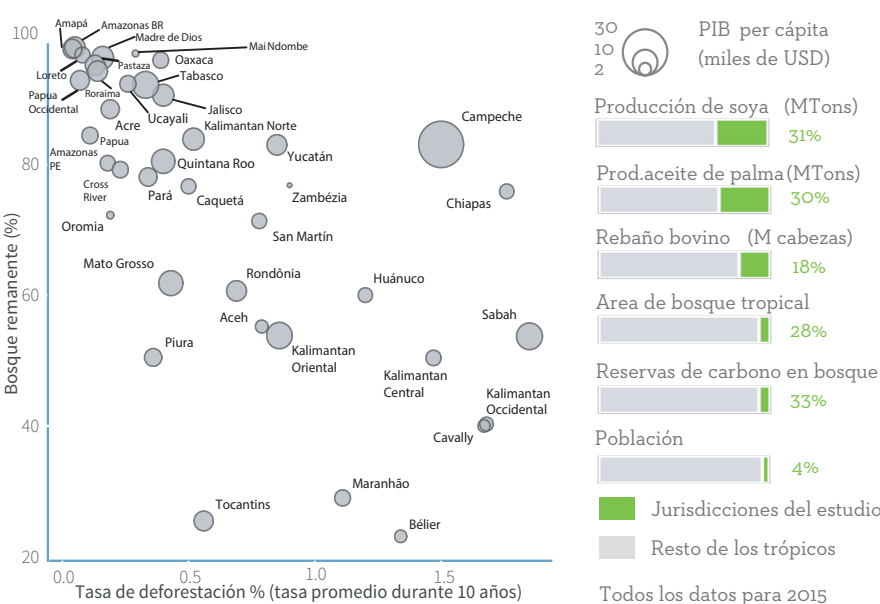


**Figura 2:** Mapas de calor de la deforestación anual (porcentaje y área de bosque remanente que se pierde cada año, respectivamente) después de 2001 en cada una de las 39 jurisdicciones. En conjunto, estos mapas de calor proporcionan una visión general de la magnitud y variación espacial y temporal de la deforestación en todas las jurisdicciones. Fuente: sistemas nacionales de monitoreo forestal (Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú e Indonesia); mapas forestales nacionales y datos de Hansen/UMD/Google/USGS/NASA con post-procesamiento por parte de EII a jurisdicciones de otros países. Ver la figura de la página central para obtener más detalles.

- En general, se perdieron 346.600 km<sup>2</sup> de bosques desde 2000 hasta 2017 en las 39 jurisdicciones combinadas.
- Vista en conjunto, la deforestación comenzó a disminuir después de 2005, alcanzó su punto más bajo en 2012 y en gran parte se ha estabilizado con un ligero aumento desde entonces. Sin embargo, esta tendencia enmascara una variación significativa dentro de las regiones y jurisdicciones específicas durante el mismo periodo de tiempo.
- La deforestación anual disminuyó en los últimos cinco años en 17 de las 39 jurisdicciones, con una tasa promedio de 0,02% por año.
- Aproximadamente la mitad de las jurisdicciones redujeron la deforestación por debajo de su nivel de referencia de

emisiones forestales (NREF) en los últimos cinco años. Los estados brasileños han evitado la deforestación de 112.734 km<sup>2</sup> al reducir su pérdida forestal por debajo de su NREF desde 2007 hasta 2017.

- En las 39 jurisdicciones, el 80% del bosque original, equivalente a 4,98 millones de km<sup>2</sup>, aún se conserva, con un total de carbono de 69,2 mil millones de toneladas.
- 28 jurisdicciones experimentaron un crecimiento económico en los últimos cinco años, marcado por un aumento promedio del PIB de 6,28%. En casi todas las regiones, el crecimiento económico parece no estar relacionado con la deforestación (Fig. 3; página central).



**Figura 3:** Evaluamos 39 jurisdicciones de acuerdo con la tasa de deforestación anual promedio (% perdido de bosque remanente) durante diez años y el porcentaje del bosque original que aún se conserva. El tamaño del círculo de cada jurisdicción refleja el PIB per cápita. Aunque las jurisdicciones estudiadas se agrupan en la esquina superior izquierda del diagrama de dispersión, lo que significa que conservan gran parte del bosque original y bajas tasas de deforestación; otras situaciones forestales y de tasas de deforestación también están representadas. A la derecha, se resume la participación colectiva en la producción de productos básicos seleccionados en los trópicos, el área de bosque tropical, las reservas de carbono de los bosques tropicales y la población. Los métodos y las fuentes de datos se resumen en <https://earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability>

Todos los datos para 2015

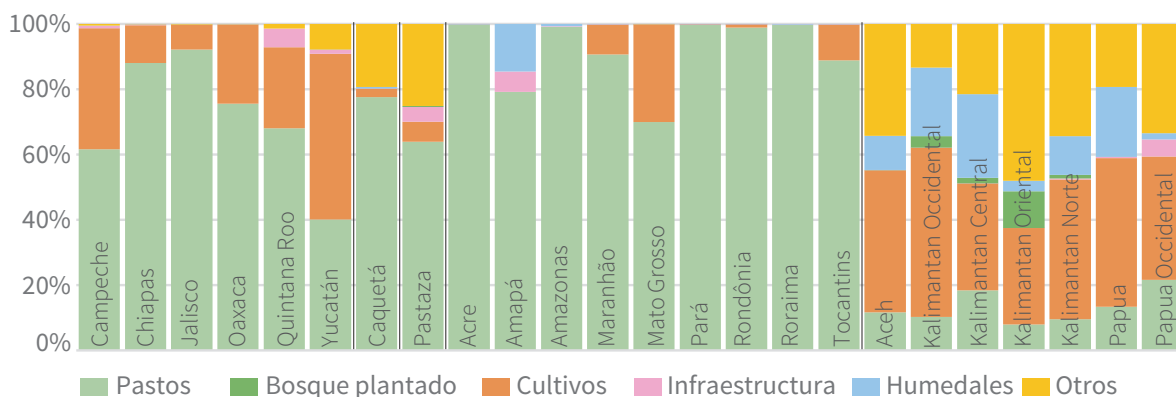


## MOTORES DE DEFORESTACIÓN



**Figura 4:** Encuestamos a los actores clave sobre sus percepciones de los motores más importantes de la deforestación en 37 de las jurisdicciones del estudio. Complementamos estas respuestas con fuentes secundarias y las analizamos en las jurisdicciones estudiadas. Cada ícono representa una serie de factores subyacentes que impulsan la deforestación y que pueden operar a escala global, nacional o jurisdiccional: económicos (mercados, costos/rendimientos económicos de las actividades de uso del suelo, pobreza y crisis económicas); políticos e institucionales (políticas públicas formales, clima político, derechos de propiedad y cambio de régimen); sociales y culturales (actitudes y creencias públicas, hogar, comportamiento individual o empresarial); demográficos (crecimiento de la población, migración y urbanización). Datos no disponibles para: Oaxaca y Pastaza.

- La agricultura a gran escala se cita en el estudio como el factor más importante de la deforestación en todas las regiones (Fig. 4).
  - La ganadería a pequeña escala es citada como un motor importante de la deforestación en América Latina, junto con la agricultura a pequeña y gran escala. Esto se confirma mediante el análisis de los mapas de cobertura terrestre (Fig. 5).
  - Los cultivos anuales (por ejemplo, soja, plátano, caña de azúcar) y los cultivos permanentes (por ejemplo, palma aceitera) se citan como importantes motores de la deforestación en América Latina y el sudeste asiático, respectivamente.
  - La agricultura a pequeña escala se cita como el principal motor de la deforestación en las jurisdicciones africanas.
- Los cultivos comunes incluyen ñame, yuca y algunos productos básicos como el cacao.
- En conjunto, la tala ilegal y las actividades mineras en todas las escalas se citan como otro motor importante de la deforestación y la degradación de los bosques en todas las regiones.
  - Los incendios son otro motor comúnmente citado de la degradación forestal. Si bien en su mayoría son de origen antropogénico, el propósito detrás de los incendios no siempre es claro; se necesita más investigación en esta área.
  - El desarrollo de la infraestructura y la urbanización son otros motores importantes de la deforestación en varias jurisdicciones.



**Figura 5:** Cuantificamos la transición espacial de las tierras forestales (desde 2000) a otras coberturas del suelo de 2001 a 2015, sobre la base de un análisis de mapas regionales de cobertura del suelo. Se mapean las conversiones de tierras forestales a pastizales, tierras de cultivo, asentamientos, humedales, bosques plantados y otras tierras. El análisis se llevó a cabo en 22 jurisdicciones para las cuales pudimos obtener los datos necesarios. Mapas de cobertura del suelo utilizados: Brasil (Mappbiomas v.2.3); Indonesia: mapa de cobertura del suelo producido por el Ministerio de Silvicultura; México: mapas post-procesados CONAFOR de la serie INEGI LULC. Las tierras forestales estables durante el período 2000-2016 fueron excluidas del análisis.

## 2. COMPROMISOS: INTENCIONES VS. ACCIÓN

Los compromisos sólidos y las metas de desempeño cuantitativas con plazos determinados son componentes esenciales de las estrategias jurisdiccionales de DRBE<sup>8</sup>. Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) de los países que forman parte del Acuerdo de París generalmente no definen las contribuciones a nivel subnacional para cumplir los compromisos nacionales. Sin embargo, los compromisos subnacionales (por ejemplo, la Declaración de Río Branco, el Under2 MOU) y las acciones son fundamentales para cerrar la brecha entre las trayectorias actuales de reducción de emisiones y los objetivos de las CND<sup>9</sup>. Las metas claras de desempeño a nivel subnacional ayudan a garantizar que los actores de todos los sectores de una jurisdicción se esfuercen por lograr los mismos objetivos a través de políticas, programas e iniciativas estratégicas, y que el avance sea mensurable. También pueden ayudar a que las jurisdicciones aprovechen el financiamiento directo de fuentes internacionales o corporativas.

### INTENCIÓN: PROMESAS HECHAS POR JURISDICCIONES

Muchas jurisdicciones se han comprometido formalmente a reducir la deforestación, reducir las emisiones, restaurar las tierras degradadas y promover el desarrollo económico sostenible y la inclusión social (Tabla 1).

Además de los compromisos descritos en la Tabla 1, algunas jurisdicciones también han establecido objetivos relacionados con el desarrollo económico sostenible, la inclusión y los derechos sociales, la mejora de los medios de vida locales y otros relacionados con la agricultura sostenible que van más allá del alcance de la Declaración de Nueva York (NYDF).

**Tabla 1:** Compromisos de las jurisdicciones respecto a los compromisos internacionales

NOMBRE DEL COMPROMISO	OBJETIVOS	NÚMERO DE JURISDICCIONES (DE 39)	METAS
Declaración de Río Branco (RBD)	Reducir la deforestación	35	Reducir la deforestación en un 80% por debajo de la línea base para 2020, condicional a la financiación basada en el desempeño de la comunidad internacional.
	Mejorar los medios de vida rurales y reducir la pobreza		Entregar una parte sustancial de los beneficios basados en el desempeño a las comunidades de los bosques, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores a través de mecanismos claros y transparentes
Under2 MOU (U2MOU)	Reducir las emisiones	27 <sup>10</sup>	Limitar las emisiones al 80-95% por debajo de los niveles de 1990, o por debajo de 2 toneladas métricas anuales por habitante, para 2050 <sup>11</sup>
Desafío de Bonn	Promover la reforestación / restauración	31 <sup>12</sup>	A nivel mundial: restaurar 150 millones de hectáreas de deforestación y tierras degradadas para 2020, y 350 millones de hectáreas para 2030 <sup>13</sup>
Declaración de Nueva York sobre los Bosques (NYDF)	Reducir la deforestación, promover la agricultura sostenible	18 <sup>14</sup>	Reducir a la mitad la pérdida de bosques naturales para el 2020 y esforzarse por terminarla el 2030; apoyar el objetivo del sector privado de eliminar la deforestación en la producción de productos agrícolas básicos para el 2020; reducir la deforestación derivada de otros sectores para el 2020, entre otros

8 D. Nepstad, et al. 2013. "More Food, More Forest, Few Emissions, Better Livelihoods: Linking REDD+, Sustainable Supply Chains and Domestic Policy in Brazil, Indonesia and Colombia." Carbon Management 4 (6): 639–58; EII (Earth Innovation Institute). 2017. Jurisdictional Sustainability: A Primer for Practitioners. San Francisco, CA: EII. Disponible en [http://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2017/02/JS-primer\\_Englishonline.pdf](http://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2017/02/JS-primer_Englishonline.pdf).

9 Data Driven Yale, NewClimate Institute, PBL 2018: Global climate action of regions, states and businesses. Disponible en <http://bit.ly/yale-nci-pbl-global-climate-action>.

10 México y Perú han respaldado el MOU a nivel nacional, además de los compromisos subnacionales.

11 Las partes firmantes deben presentar un Apéndice Jurisdiccional, que defina un conjunto único de acciones para alcanzar los objetivos y metas de reducción de emisiones a mediano plazo hasta el 2030. Hasta la fecha, 18 de las 27 jurisdicciones que han firmado el U2MOU también han presentado su Apéndice Jurisdiccional.

12 Los compromisos para el Desafío de Bonn se hacen a nivel nacional. 31 jurisdicciones de las 39 incluidas en nuestro estudio están ubicadas en 10 países diferentes que están comprometidos con el Desafío de Bonn. Además, 4 estados mexicanos (Campeche, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo) han definido compromisos de restauración a nivel estatal para el Desafío de Bonn, además de la contribución de cada estado al compromiso nacional.

13 Los firmantes definen sus propios compromisos individuales, incluidas las metas de restauración cuantitativa y de duración determinada y los beneficios cuantificados económicos y climáticos (captura de carbono).

14 Colombia, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Indonesia, México y Perú han respaldado a la NYDF a nivel nacional, además de los compromisos subnacionales. Todas las jurisdicciones que han respaldado la NYDF también son signatarias de RBD y U2MOU.



## RECUADRO 2. MATO GROSSO, BRASIL: ESTRATEGIA PRODUCIR, CONSERVAR, INCLUIR (PCI)

La **estrategia PCI** de Mato Grosso, lanzada en 2015, incluye 21 objetivos cuantitativos y con plazos definidos que unen a los actores y sectores dentro de la jurisdicción en la promoción del DRBE. El PCI refleja el contexto único de Mato Grosso con objetivos enfocados en mejorar la productividad ganadera y de cultivos (por ejemplo, mayores rendimientos de carne de res, aumentar el área de la soja, el maíz y el algodón plantados en tierras de pastoreo degradadas de 9,5 a 12,5 millones de hectáreas para el 2030), reducir la deforestación (la tasa y mínimo el 60% de la vegetación nativa del estado), y aumentar la inclusión socioeconómica de los pequeños agricultores (por ejemplo, extender la asistencia técnica del 30% al 100% de los pequeños agricultores para 2030), entre otros. Los objetivos tienen un resultado implícito de deforestación neta cero en todo el estado, así como emisiones netas cero de carbono forestal para el 2030, que mantendrían ~6 GtCO<sub>2</sub>e fuera de la atmósfera. Los objetivos se desarrollaron a través de procesos participativos que incluyeron actores de sectores públicos, privados y sin fines de lucro; la implementación es monitoreada por un comité ejecutivo formal de múltiples actores. En gran parte debido a la estrategia PCI de Mato Grosso y la ley REDD+, Mato Grosso firmó un contrato de US\$50 millones con Alemania y el Reino Unido basado en el financiamiento por desempeño<sup>15</sup>.

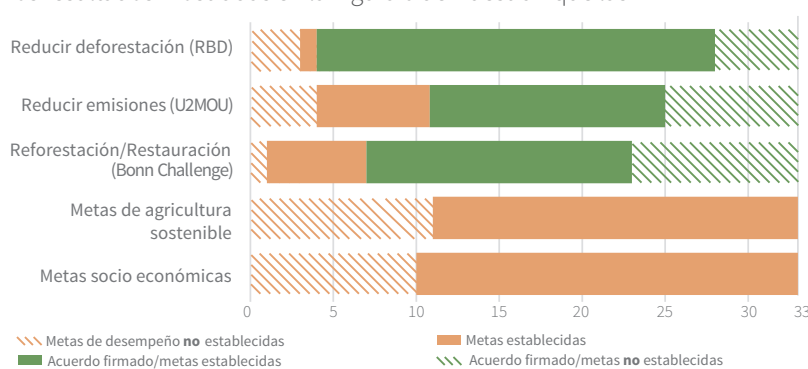


## ACCIÓN: INTERIORIZAR COMPROMISOS A TRAVÉS DE METAS DE DESEMPEÑO

Los compromisos subnacionales descritos anteriormente contribuyen a la acción climática a nivel internacional; sin embargo, no indican si una jurisdicción ha desarrollado objetivos de desempeño distintos o medidas aplicadas para lograr esos objetivos. Firmar la Declaración de Rio Branco, por ejemplo, no garantiza que una jurisdicción haya evaluado su potencial de reducción de la deforestación y haya formulado objetivos realistas en función de su contexto y punto de partida. Tampoco garantiza que los actores en campo sean lo suficientemente conscientes de o hagan contribuciones concertadas para alcanzar los objetivos.

Los resultados mostrados en la Figura 6 demuestran que las

jurisdicciones individuales están desarrollando metas de desempeño que reflejan sus puntos de partida únicos, sus capacidades y sus necesidades. Es importante destacar que muchas de estas metas se desarrollaron dentro de marcos nacionales, desde la implementación subnacional de legislación nacional (por ejemplo, RAN-GRK en provincias de Indonesia<sup>17</sup>, PDRC en regiones peruanas<sup>18</sup>, PPCD en estados brasileños<sup>19</sup>) hasta el ser parte del contexto de acuerdos multilaterales de financiamiento con países tropicales (p. ej., Programa de Reducción de Emisiones del FCPF en Mai Ndombe, Carta de Intención DRC-CAFI). Estos ejemplos demuestran cómo los marcos a nivel nacional pueden fomentar la acción subnacional hacia los objetivos internacionales, y pueden tener más peso/relevancia dentro de la jurisdicción que firmar un compromiso internacional.



**Figura 6:** Número de jurisdicciones que han definido metas a nivel subnacional relacionadas con sus compromisos de nivel internacional<sup>16</sup>. Las barras sólidas de color verde indican el número de jurisdicciones que han firmado el RBD, U2MOU y el Desafío de Bonn, respectivamente, y que han desarrollado metas de desempeño relacionadas con esos objetivos. Las barras sólidas de color naranja representan las jurisdicciones que han establecido metas relacionadas, pero no han firmado el compromiso internacional. En el caso de las barras de metas de *Agricultura Sostenible* y *Socioeconómicas*, la falta de secciones de color verde indica que, si bien algunas jurisdicciones han establecido metas dentro de esas categorías, no están relacionadas con ningún compromiso de escala global incluido en nuestro análisis.

15 Ver D. Nepstad, et al., 2018. "Mato Grosso, Brazil": [https://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2014/09/Profile\\_MATOGROSSO\\_2018\\_ENG.pdf](https://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2014/09/Profile_MATOGROSSO_2018_ENG.pdf); Ver [www.pci.mt.gov.br](http://www.pci.mt.gov.br) y [www.pcimonitor.org](http://www.pcimonitor.org) para más información sobre la PCI.

16 El análisis no considera si las metas a nivel subnacional son más, menos o igual de ambiciosas que las metas de mayor nivel e incluye 33 jurisdicciones (excluye Roraima, Piura, Pastaza, Oaxaca, Tabasco y Papúa).

17 El Plan de Acción Nacional de Indonesia para la Reducción de Emisiones de GEI (RAN-GRK) requiere que las provincias desarrollen Planes de Acción Local para la Reducción de Emisiones de GEI (RAD-GRK).

18 Las regiones peruanas deben desarrollar Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), requeridos por el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN).

19 El Plan de Acción de Brasil para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm) y el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en el Cerrado (PPCerrado) requieren la implementación a nivel estatal de planes paralelos.

## PROGRESO: AVANZAR HACIA EL LOGRO DE METAS A TRAVÉS DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E INICIATIVAS CLAVE

Las intervenciones clave son financiadas principalmente por donantes multilaterales y bilaterales, y luego por el propio presupuesto de las jurisdicciones y los gobiernos nacionales. La mayoría son políticas públicas y programas implementados por gobiernos provinciales y nacionales, de los cuales unos pocos tenían comités directivos de múltiples actores, como la Estrategia PCI de Mato Grosso (*ver Recuadro 2*).

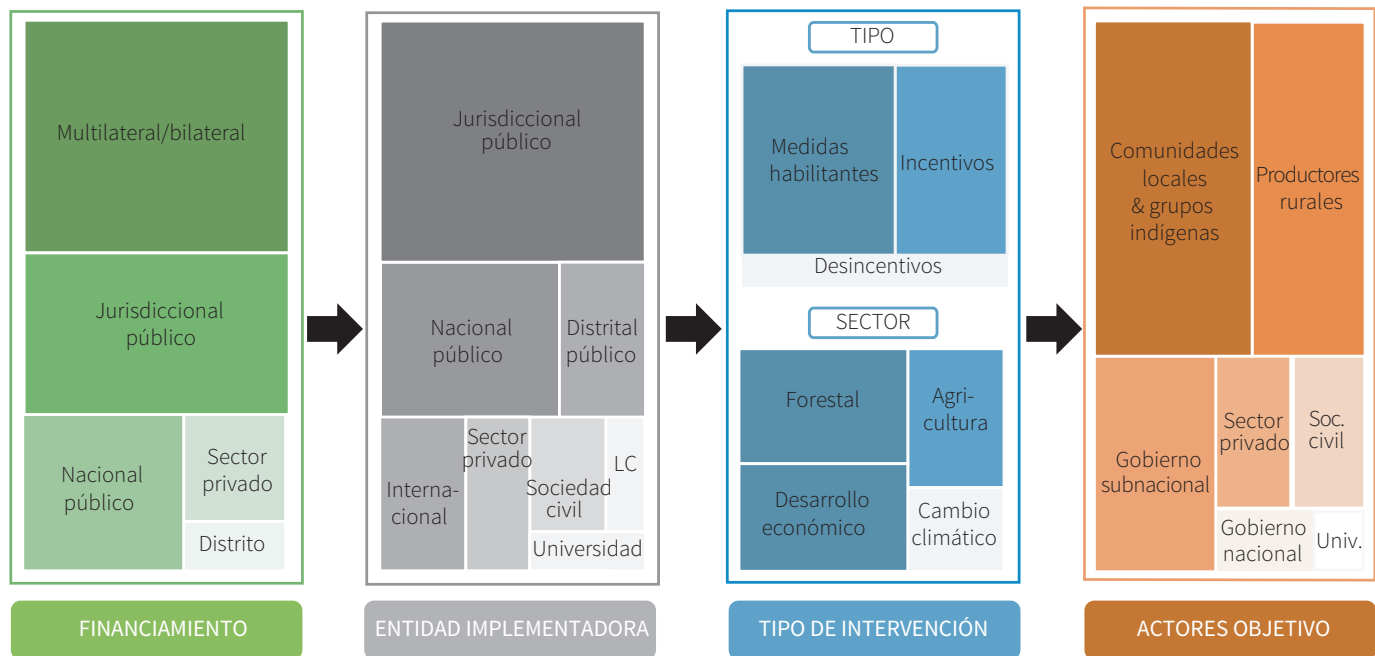
Aunque las intervenciones clave se centran principalmente en la silvicultura y el desarrollo económico, casi todas tienen más de un enfoque. La mayoría incluye medidas habilitantes para mejorar las condiciones de gobernanza, como la planificación espacial, la aclaración de la tenencia y el fortalecimiento de las instituciones locales. Muchas incluyen medidas basadas en incentivos que van desde amplias políticas de crecimiento ecológico (por ejemplo, Kalimantan Oriental, Indonesia) hasta programas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) (por ejemplo, en Quintana Roo y Chiapas, México), así como iniciativas que apoyan una producción agrícola más sostenible (por ejemplo, cacao en Huánuco, Perú) y aumentan el valor de los productos forestales (Amapá, Brasil). El menor número de intervenciones que incluyen desincentivos, como las restricciones al uso y acceso al bosque, siempre se combinan con componentes basados en incentivos.

La mayoría de las intervenciones se dirigen a los pueblos indígenas y las comunidades locales para respaldar su función en la gestión (a menudo) de grandes áreas de bosques



tropicales, seguidas de las intervenciones que se enfocan en los productores rurales (incluidos los pequeños agricultores) para promover transiciones hacia prácticas de producción más sostenibles. Muchas otras también se centran en el fortalecimiento de las capacidades de gobernanza a nivel provincial y distrital.

Estos resultados muestran una acción clara por parte de los gobiernos subnacionales en el financiamiento y la implementación de políticas, programas e iniciativas hacia la sostenibilidad. Los donantes internacionales, los gobiernos a nivel nacional, el sector privado y una serie de otros actores juegan un papel importante en el apoyo de este avance. Por último, la prevalencia de incentivos y la dedicación para incluir a los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pequeños agricultores como beneficiarios clave de estas intervenciones son prometedores para cumplir con los objetivos de clima y desarrollo.



**Figura 7:** Características de 4-5 intervenciones claves documentadas por jurisdicción (para 33 jurisdicciones del estudio — excluye Piura, Pastaza, Roraima, Oaxaca, Tabasco, and Papua) en términos de fuente de financiamiento, entidad implementadora, tipo de intervención y actores objetivo. Se debe tomar en cuenta que las intervenciones individuales pueden incluir más de una categoría (es decir, medidas habilitantes, incentivos, desincentivos) dentro de una característica (es decir, tipo de intervención, sector, actores objetivos) para todas las características.



### RECUADRO 3. FOMENTANDO CREDIBILIDAD PARA EL AVANCE JURISDICCIONAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Uno de los factores más importantes que influye en la capacidad de las jurisdicciones para atraer a los socios que necesitan es la credibilidad. ¿Los esfuerzos de la jurisdicción representan un avance real por encima de la vía de desarrollo “normal”? ¿Este avance es verificado y ampliamente aceptado?

Un enfoque ampliamente utilizado para establecer la credibilidad es a través de estándares internacionales de sostenibilidad. Los principios, criterios e indicadores para evaluar las prácticas y los impactos se desarrollan y aplican para determinar la sostenibilidad de la producción, un enfoque comúnmente aplicado para muchos productos agrícolas y forestales básicos. Una vez certificados según estos principios y criterios, los productos de una granja o un centro de procesamiento se consideran “sostenibles” y son buscados por algunos mercados. La limitación de los estándares internacionales es que no han sido muy efectivos en la “integración” de la sostenibilidad, es decir, impulsar cambios a gran escala hacia la sostenibilidad entre los productores que están causando gran parte del daño<sup>20</sup>.

En el caso del enfoque jurisdiccional, donde el avance hacia la sostenibilidad a escala de vastas geografías políticas aún es bastante incipiente, se necesitan sistemas que reconozcan y recompensen los primeros pasos hacia la sostenibilidad jurisdiccional, no solo los pasos finales, y que respondan a las demandas de diferentes tipos de socios.

Se han desarrollado nuevos sistemas y herramientas de calificación para evaluar la sostenibilidad jurisdiccional.

El Estándar de Paisaje<sup>21</sup> tiene como objetivo ayudar a las empresas, los gobiernos y los financiadores a evaluar, informar y hacer afirmaciones de forma veraz sobre la sostenibilidad de los paisajes de producción. El Enfoque de Productos Básicos/Jurisdicciones<sup>22</sup> identifica jurisdicciones que cumplen con los criterios de elegibilidad para fuentes preferenciales establecidas por Unilever y Marks & Spencer.

El Marco de Evaluación del Paisaje<sup>23</sup> es más flexible, proporciona un marco de pilares de sostenibilidad que los gobiernos y los actores del paisaje pueden utilizar para organizar la información y comunicar el avance hacia sus propios objetivos de sostenibilidad del paisaje, y así ayudar a facilitar la gestión adaptativa y las alianzas o inversiones para promover dichos objetivos. La Herramienta de Calificación para Paisajes Sostenibles<sup>24</sup> se puede utilizar para recopilar y comunicar información estandarizada sobre políticas y gobernanza jurisdiccionales.

Un paso inicial importante es evaluar e informar de manera confiable qué cambios están efectuando las jurisdicciones para alcanzar la sostenibilidad y cuáles son los impactos de dichos cambios, lo cual es uno de los motivos de esta evaluación global y de la plataforma en línea GCFImpact.org (Ver Recuadro 6). Conocer el estado de la sostenibilidad jurisdiccional debería ayudar a impulsar los avances en los sistemas actuales y futuros para monitorear el progreso y fomentar las alianzas.



20 <https://news.mongabay.com/2017/11/it-is-time-to-recognize-the-limits-of-certification-in-agriculture-commentary/>

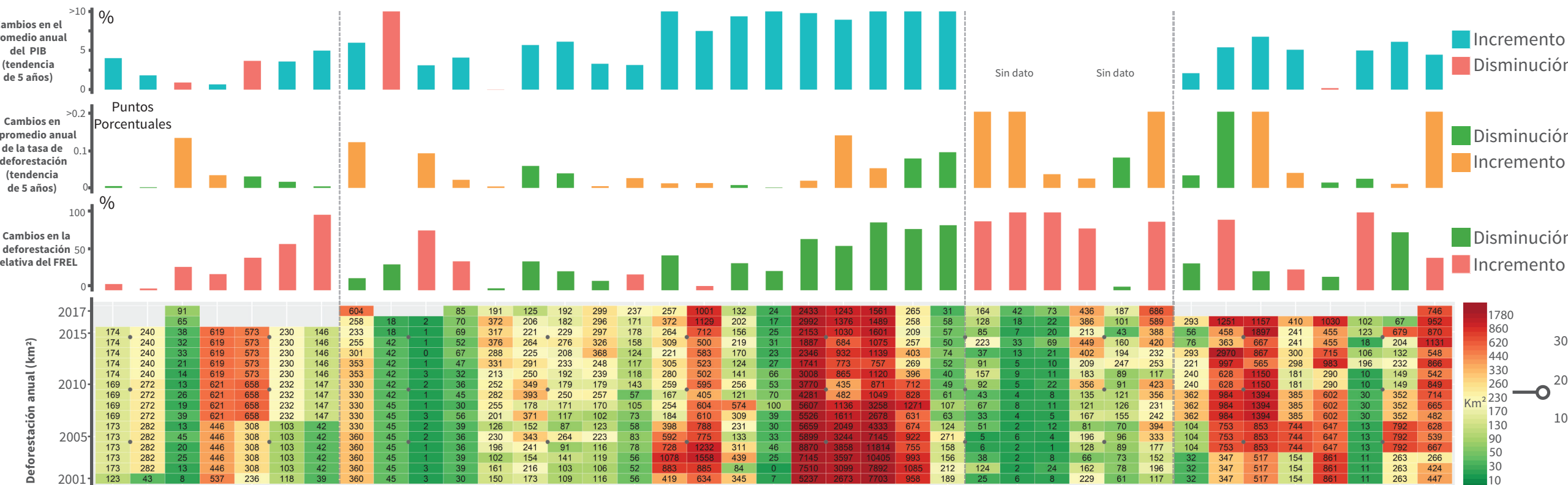
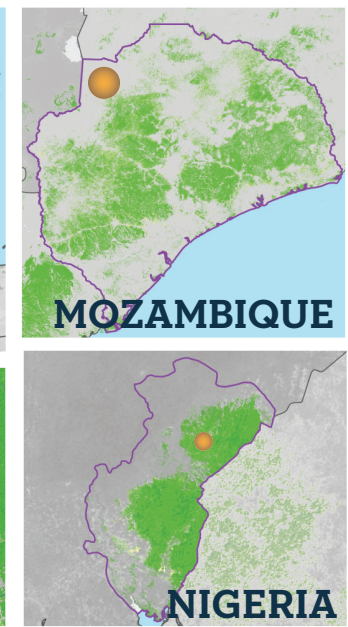
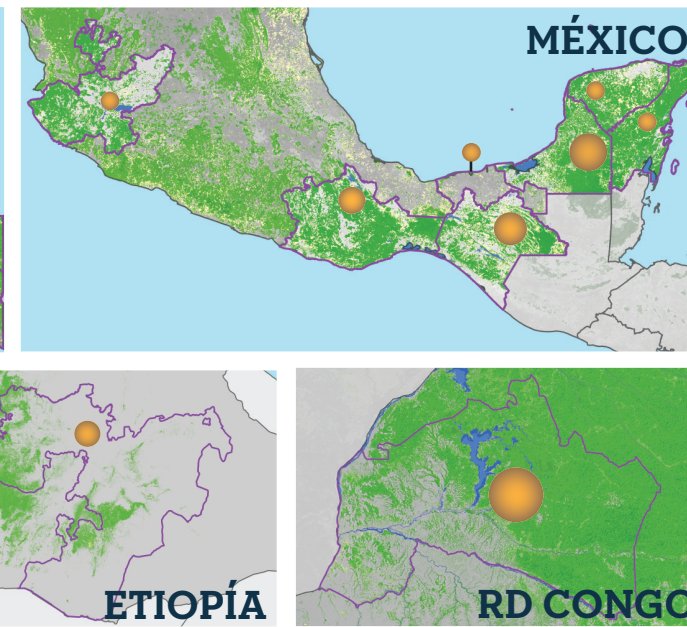
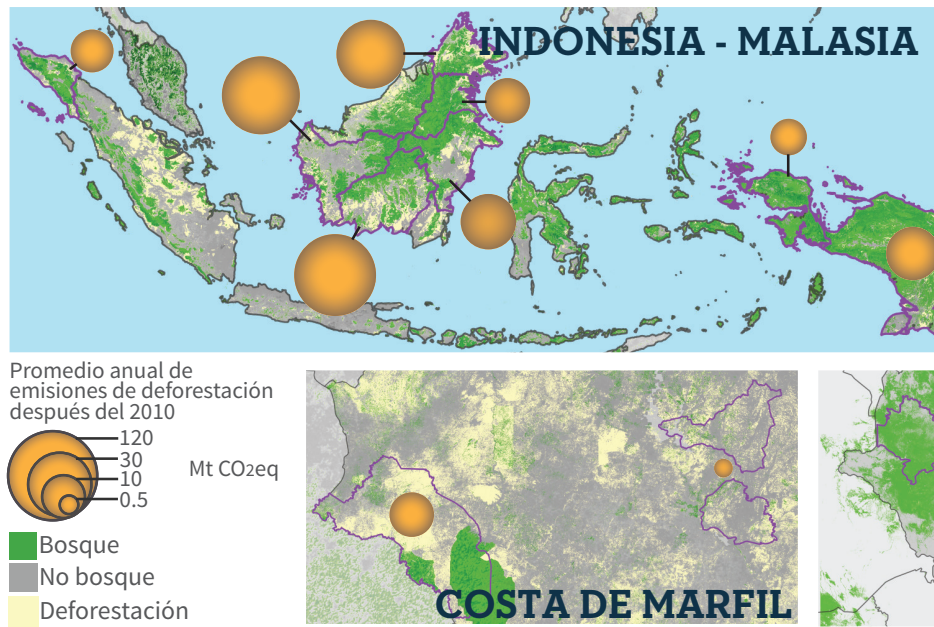
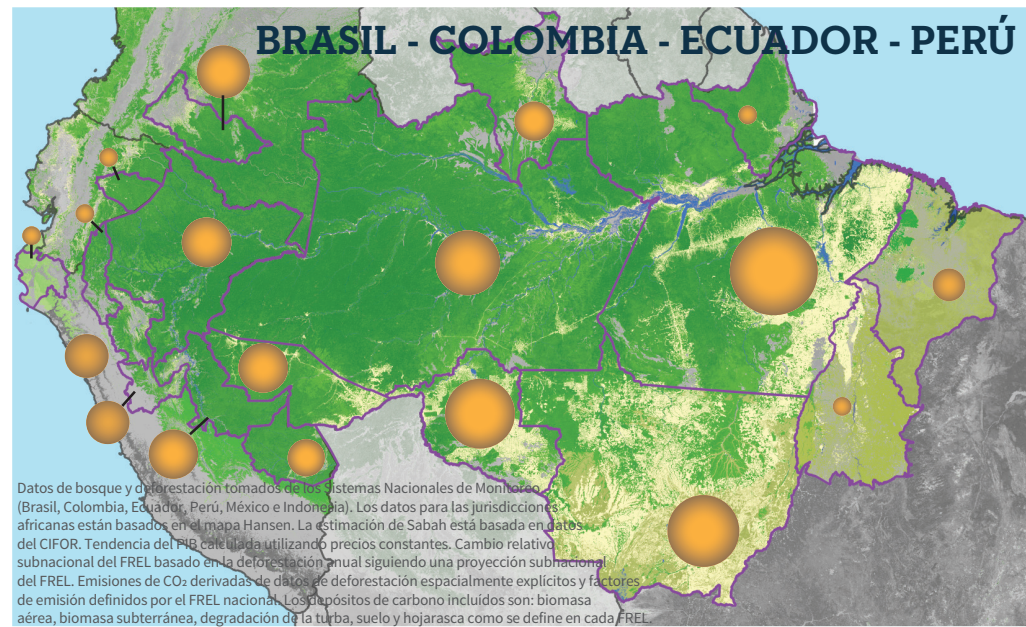
21 <http://verra.org/project/landscape-standard/>

22 <https://commoditiesjurisdictions.wordpress.com/>

23 <https://www.conservation.org/projects/Pages/Landscape-Assessment-Framework.aspx>

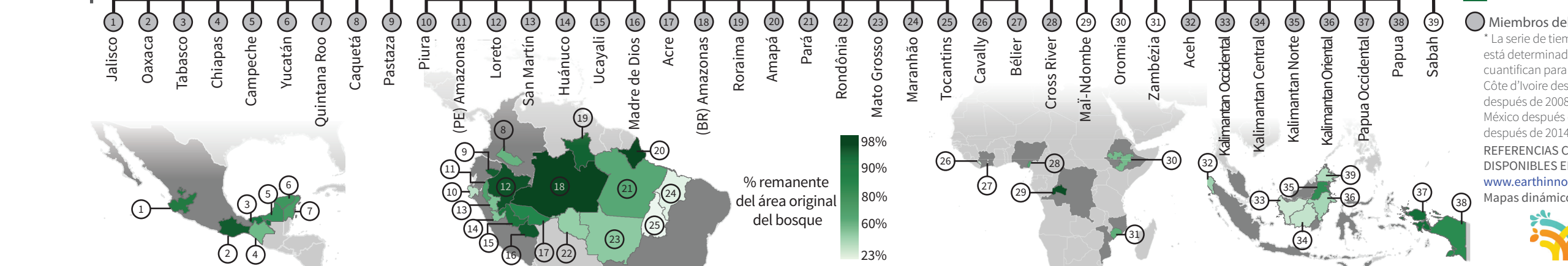
24 <http://www.climate-standards.org/sustainable-landscapes-rating-tool/>





**DATOS GENERALES:**

- 39** Jurisdicciones Subnacionales
- 28%** del bosque tropical del mundo
- 33%** de las reservas de carbono de los bosques tropicales del mundo
- 6,8** GtCO<sub>2</sub>e de emisiones evitadas\*



Miembros del GCF

\* La serie de tiempo para estimar las emisiones jurisdiccionales evitadas está determinado por el NREF nacional. Las emisiones evitadas se cuantifican para Brasil después de 2005, Colombia después de 2012, Côte d'Ivoire después de 2014, RD Congo después de 2014, Ecuador después de 2008, Etiopía después de 2014, Malasia después de 2015, México después de 2010, Mozambique después de 2012, Nigeria después de 2014, Indonesia después de 2012, Perú después de 2014.

REFERENCIAS COMPLETAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES EN: [www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability](http://www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability)

Mapas dinámicos disponibles en: <http://gcfimpact.org/maps>





### 3. AVANCE HACIA LA SOSTENIBILIDAD JURISDICCIONAL

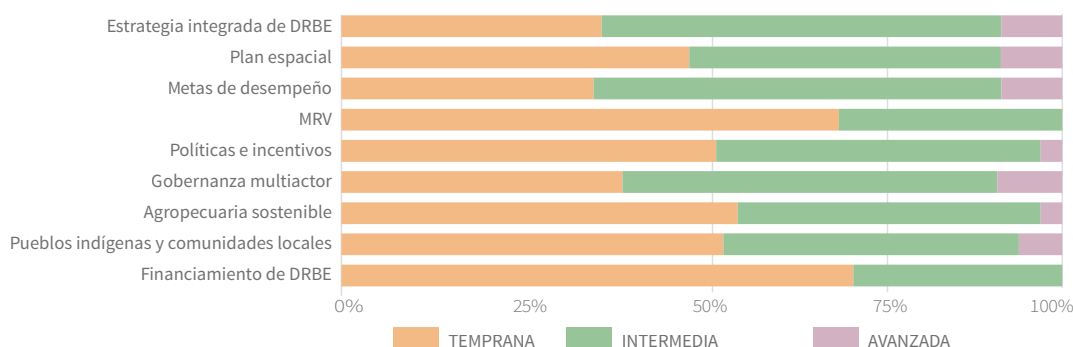
Evaluamos el avance de las jurisdicciones hacia la sostenibilidad sobre la base de 9 elementos clave (Tabla 2). Para cada elemento, una jurisdicción fue calificada como “Temprana”, “Intermedia” o “Avanzada” según su avance. La categoría “Intermedia” es amplia en relación con “Temprana” y “Avanzada”: es más fácil definir claramente las políticas y otras acciones que son incipientes o avanzadas como puntos finales en esta escala. La categoría “Intermedia” incluye jurisdicciones que han avanzado un poco más allá de los criterios mínimos, así como aquellas que carecen del conjunto completo de criterios necesarios para ser calificadas como “Avanzadas”. El análisis que proporcionamos a continuación representa una interpretación temprana de los datos recopilados para 33 de las 39 jurisdicciones<sup>25</sup>.



Foto: D. McGrath

**Tabla 2:** Descripción de los criterios utilizados para evaluar cada jurisdicción en términos de su avance en cada uno de los 9 elementos clave de la sostenibilidad jurisdiccional. Para obtener más información sobre los criterios utilizados para clasificar cada elemento, sírvase visitar <https://earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability>.

ELEMENTO	CRITERIO
Estrategia integrada de DRBE	Existencia de una estrategia jurisdiccional y un plan de acción, que establece la visión y la estrategia para la jurisdicción, aborda todos los motores importantes, es formalmente aprobada y adoptada por el gobierno e implica una amplia participación de actores en su desarrollo e implementación.
Plan espacial	Existencia de un plan espacial para toda la jurisdicción que tiene una base ecológica, reconoce tierras y recursos indígenas, consuetudinarias y locales, mitiga los efectos sociales y ambientales negativos de los proyectos de infraestructura planificados y, en términos generales, involucra a los actores en su desarrollo.
Metas de desempeño	Existencia de metas oficiales, realistas, cuantificables y con plazos definidos para toda la jurisdicción, desarrolladas con una amplia participación de actores.
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)	Grado en que un sistema de MRV jurisdiccional proporciona de manera fiable, precisa y pública informes respaldados por el gobierno sobre los bosques, el uso del suelo, las emisiones de GEI, la biodiversidad, los indicadores económicos y sociales, etc., y se utiliza para evaluar la estrategia integrada de DRBE y las metas de desempeño.
Políticas e incentivos	Amplitud y alineación de las políticas e incentivos vigentes o en desarrollo para todos los sectores relevantes que afectan el uso del suelo; medida en que el marco apoya a una variedad de actores para que participen en prácticas sostenibles.
Gobernanza multiactor	Existencia y amplitud de representación de los procesos de múltiples actores u órganos rectores enfocados en el uso del suelo o relacionados con él, así como otros asuntos que tienen que ver con la sostenibilidad y su papel oficial en la toma de decisiones y la gobernanza.
Agropecuaria sostenible	Existencia, calidad y accesibilidad de las medidas para mejorar la sostenibilidad del sector agrícola en general (incluida la producción agrícola y ganadera en pequeña y gran escala) en desarrollo o en marcha.
Pueblos indígenas y comunidades locales	Grado en que los derechos de tenencia, gestión, exclusión y uso de tierras y recursos de los pueblos indígenas y comunidades locales están claramente definidos por ley; así como el grado en el que los pueblos indígenas y comunidades locales son incluidos en los procesos regionales de toma de decisiones y en las estructuras de distribución de beneficios.
Financiamiento de DRBE	Disponibilidad y diversidad de financiamiento para apoyar e incentivar el desarrollo y la implementación de estrategias de DRBE y programas, iniciativas o actividades relacionadas.



**Figura 8:** Distribución de las categorías de calificación por jurisdicción en las 33 jurisdicciones estudiadas.

<sup>25</sup> Roraima, Pastaza, Piura, Oaxaca, Tabasco, Papua han sido excluidas de este análisis.

En general, las jurisdicciones son predominantemente “Tempranas” o “Intermedias” en cuanto a su avance hacia la sostenibilidad jurisdiccional. Las jurisdicciones han avanzado más lentamente en la implementación de sistemas de MRV robustos, transparentes y accesibles, en el establecimiento del apoyo político, técnico y financiero para la transición hacia una agricultura sostenible y en asegurar el financiamiento necesario para avanzar en la preparación e implementación del DRBE.

Como grupo, las jurisdicciones mostraron un mayor avance en sus planes espaciales y en los procesos de múltiples actores relacionados con el DRBE, aunque aproximadamente la mitad de las jurisdicciones fueron clasificadas como “Intermedias” en estas categorías (Fig 8, Tabla 3). Las designaciones de “Temprana”, “Intermedia” y “Avanzada” deben ser vistas como indicadores de los tipos de apoyo adicionales que las jurisdicciones necesitan para avanzar con sus estrategias de DRBE.

**Tabla 3:** Para cada elemento descrito en la Tabla 2, describimos la calificación promedio para el grupo de jurisdicciones estudiadas, así como los problemas, desafíos y oportunidades más frecuentes asociados con cada elemento.

○ TEMPRANA   ● INTERMEDIA   ● AVANZADA

Estrategia integrada de DRBE	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>21 de 33 jurisdicciones tienen planes o estrategias para toda la jurisdicción, pero solo tres de éstos (Plan de Sostenibilidad y Gobernanza Multianual 2016-19 de Acre, la Estrategia de Producir, Conservar, Incluir de Mato Grosso, el Plan de Acción Estratégico a largo plazo 2016-2035 de Sabah) abordan de manera amplia las causas de las emisiones terrestres en todos los sectores e incorporan una gama de elementos críticos (incluyendo objetivos, MRV, incentivos, etc.).</li> </ul>
Plan espacial	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 jurisdicciones tienen planes espaciales implementados; casi todos, a excepción de tres (Acre, Pará, Jalisco), no abordan adecuadamente los derechos de las comunidades indígenas y/o locales, y/o no mitigan los efectos de proyectos de infraestructura planificados, y/o fueron desarrollados con un bajo nivel o calidad de participación de los actores.</li> <li>La capacidad de monitorear y hacer cumplir las regulaciones de uso del suelo tal como se define en los planes espaciales es un desafío clave.</li> </ul>
Metas de desempeño	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 jurisdicciones tienen objetivos cuantitativos con plazos definidos relacionados con la reducción de la deforestación y/o las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación (<i>Ver la Sección 2</i>).</li> <li>Dos tercios de las jurisdicciones tienen objetivos cuantitativos con plazos definidos centrados en la agricultura sostenible y en cuestiones sociales (incluida la distribución de beneficios, los derechos, el involucramiento, la mejora de los medios de vida, etc.).</li> <li>Evaluar el avance hacia los objetivos es un desafío importante en la mayoría de las jurisdicciones, especialmente para metas distintas a las relacionadas con la reducción de la deforestación y el aumento de la reforestación.</li> </ul>
MRV	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casi todas las jurisdicciones tienen sistemas de MRV implementados o en desarrollo, pero no cumplen con una de las siguientes áreas: frecuencia, confiabilidad, precisión o transparencia.</li> <li>12 jurisdicciones tienen sistemas bastante avanzados, ya sea específicos de la jurisdicción o como parte del sistema nacional, pero sus informes y datos no están a disposición del público.</li> </ul>
Políticas e incentivos	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>El principal desafío para las jurisdicciones es la falta de alineación de políticas entre los niveles gubernamentales y/o entre los sectores. Si bien la mayoría de las jurisdicciones han implementado algunas políticas para promover el DRBE, éstas tienden a estar aisladas y/o tienen un alcance limitado en al menos la mitad de las jurisdicciones.</li> <li>Los principales desafíos para el desarrollo de políticas e incentivos duraderos incluyen los cambios de gobierno, las limitaciones relacionadas con las estructuras de gobernanza nacional centralizadas y la corrupción a nivel subnacional y nacional.</li> </ul>
Gobernanza multiactor	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 jurisdicciones cuentan con procesos multiactores recientes o en curso que son relevantes para el DRBE, pero muy pocos (Acre, Jalisco, Quintana Roo) han establecido organismos ampliamente representativos y de múltiples actores específicamente para desarrollar e implementar planes y actividades de DRBE.</li> <li>Un desafío común es la inclusión insuficiente de grupos de actores importantes (por ejemplo, productores, pueblos indígenas, comunidades locales) en discusiones coordinadas con el sector público.</li> </ul>
Agropecuaria sostenible	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 jurisdicciones han alcanzado algún avance en la producción agrícola sostenible en ciertas partes de la jurisdicción o en cadenas de suministro seleccionadas.</li> <li>Solo Mato Grosso tiene una amplia gama de iniciativas más avanzadas que se enfocan en la producción agrícola y ganadera, tanto a gran como a pequeña escala.</li> <li>La mayoría de las jurisdicciones tienen incentivos insuficientes o inadecuados (incluido un bajo acceso al mercado) para la producción sostenible, junto con una baja participación del sector privado en la agenda de sostenibilidad de la jurisdicción.</li> </ul>
Pueblos indígenas y comunidades locales	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>En 18 jurisdicciones, la tenencia de la tierra y los derechos de acceso para pueblos indígenas y comunidades locales son débiles o se aplican de manera deficiente y/o el involucramiento de los pueblos indígenas es bajo.</li> <li>Mecanismos para asegurar los derechos a la tierra y garantizar la distribución equitativa de beneficios han sido desarrollados de manera óptima en Acre y Quintana Roo, pero también se encuentran en marcha en otras jurisdicciones (por ejemplo, Mato Grosso, algunas jurisdicciones mexicanas y Papúa Occidental, entre otros).</li> </ul>
Financiamiento de DRBE	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>El financiamiento no ha llegado a la mayoría de las jurisdicciones, lo que hace que este sea uno de los elementos más débiles en términos de avance hacia la sostenibilidad jurisdiccional.</li> <li>23 de las 33 jurisdicciones tienen poco o ningún financiamiento disponible para apoyar el desarrollo de las estrategias y programas de DRBE, mientras que el resto cuenta con financiamiento (insuficiente) para respaldar sus esfuerzos. (<i>Ver la Sección 4</i>).</li> </ul>



## 4. FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO Y ASOCIACIONES

La mayoría de las jurisdicciones estudiadas (35) son signatarias de la Declaración de Río Branco, que establece que el objetivo de reducir la deforestación en un 80% para 2020 solo será posible con ayuda externa, es decir, por medio del financiamiento adecuado y suficiente y las alianzas con empresas:

*“Nuestros esfuerzos para construir estrategias jurisdiccionales y programas para el desarrollo bajo en emisiones no pueden sostenerse sin apoyo adicional. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que se asocie con nosotros a medida que seguimos construyendo programas jurisdiccionales robustos que permitirán transiciones integradas a gran escala hacia el desarrollo sostenible ... es imperativo que tengamos acceso a apoyo financiero y técnico, y, aún más importante, a oportunidades nacionales e internacionales de mercado y no de mercado para las reducciones de emisiones logradas en nuestras jurisdicciones...*

*Hacemos un llamado al Foro de Bienes de Consumo y otras iniciativas del sector privado enfocadas en lograr cadenas de suministro de cero deforestación neta para que se asocien con nosotros y juntos construyamos programas jurisdiccionales robustos para REDD+, fomentemos el desarrollo rural bajo en emisiones y creemos programas para el abastecimiento preferencial de productos agrícolas básicos...*

*Nos comprometemos a reducir significativamente las emisiones siempre que se disponga de fondos adecuados, suficientes y basados en el desempeño a largo plazo, ya sea a través de fuentes de mercado o no mercado. Si se garantiza este financiamiento, nos comprometemos a reducir la deforestación en un 80% para el 2020.” (Declaración de Río Branco, 2014)*

En esta sección, revisamos cuánta ayuda externa han recibido las jurisdicciones del estudio a través del financiamiento climático y de alianzas con empresas que buscan productos básicos cultivados de forma sostenible. La Figura 9 proporciona un resumen visual del avance alcanzado hasta el momento en el financiamiento de las 39 jurisdicciones y en el establecimiento de alianzas entre empresas y el gobierno para ayudar a impulsar el progreso.

### FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO

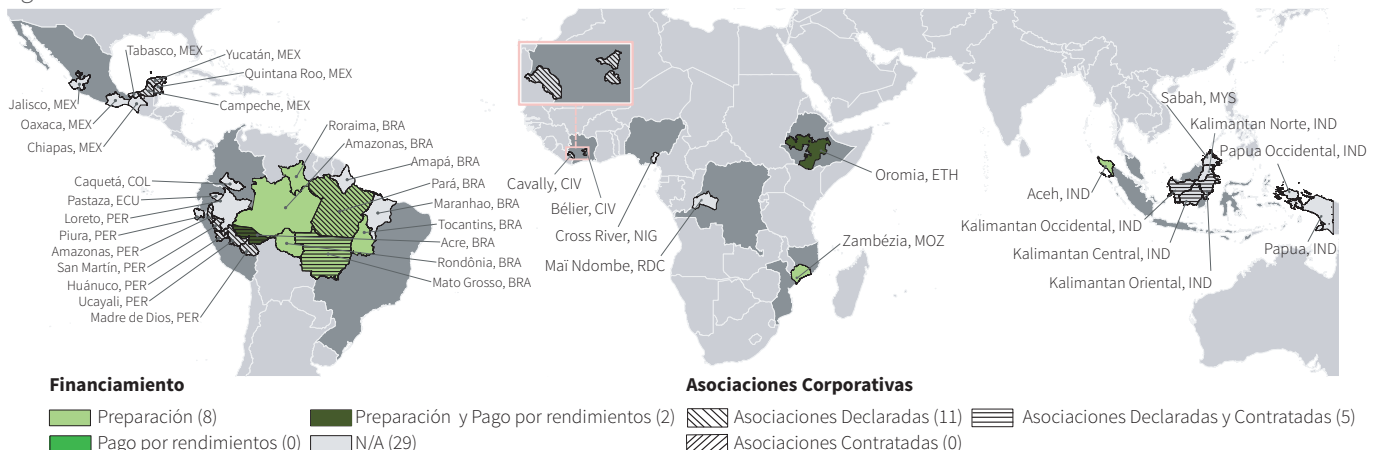
En la reciente síntesis “Why Forests? Why Now?”<sup>26</sup> Seymour y Busch describen el estado actual del financiamiento climático para los bosques tropicales como “demasiado bajo, demasiado lento, demasiado restringido como ayuda”. Este estudio respalda esa conclusión general.

#### Pago por desempeño

Clasificamos el financiamiento en dos categorías generales: con y sin condicionalidad de desempeño. En el financiamiento de “pago por desempeño” (PFP) o “basado en el desempeño”, el donante o inversionista se compromete a pagarle a un gobierno nacional o subnacional solo si se logran metas para reducir la deforestación o las emisiones de carbono de la deforestación en un plazo determinado. Este tipo de acuerdos financieros son un sello distintivo de la “era REDD+”, defendida por Noruega, Alemania y, más recientemente, por el Reino Unido. La mayoría del financiamiento de PFP se ha asignado a los gobiernos nacionales, comenzando con el compromiso de Noruega de US\$1 mil millones al Fondo Amazonia de Brasil. Alemania ha sido pionera en los acuerdos subnacionales de PFP a través de su programa “REDD Early Movers”.

El financiamiento basado en el desempeño para las jurisdicciones aspirantes no es adecuado ni suficiente, pero está llegando a las jurisdicciones y los primeros resultados son muy positivos. La única experiencia subnacional de varios años con este mecanismo (Acre, Brasil<sup>27</sup>) demuestra que un contrato de PFP bien diseñado puede impulsar un progreso considerable hacia el DRBE (ver la Sección 3).

Se han firmado nuevos contratos de pago por desempeño con Mato Grosso, Brasil (KfW/REM Alemania, Reino Unido), Colombia (“Visión Amazonía”, Alemania, Noruega, Reino Unido) y Ecuador (Alemania, el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial). La cantidad de financiamiento de PFP que se asignará a Caquetá y Pastaza, respectivamente, aún no se ha determinado. El sistema de pago por desempeño más grande del mundo para bosques tropicales: el Fondo Amazonía de Brasil, administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico



**Figura 9:** Financiamiento y alianzas entre empresas y el gobierno. Mapa de las jurisdicciones estudiadas que han recibido financiamiento o contratos de pago por desempeño, y aquellas que han establecido alianzas formales “declaradas” o “contratadas” con empresas enfocadas en el abastecimiento de productos básicos cultivados de forma sostenible.

<sup>26</sup> Seymour, F. and J. Busch. 2016. Why Forests? Why now? The Science, Economics, and Politics of Tropical Forests and Climate Change. Center for Global Development.  
<sup>27</sup> Ver M. Leal, et al. “Acre, Brazil”: [https://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2018/09/profiles\\_led/SJS\\_Profiles\\_ENG/Brazil/Profile\\_ACRE\\_Leal\\_2018\\_ENG.pdf](https://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2018/09/profiles_led/SJS_Profiles_ENG/Brazil/Profile_ACRE_Leal_2018_ENG.pdf).

y Social de Brasil (BNDES) y financiado principalmente por Noruega, ha entregado grandes subvenciones a seis jurisdicciones del GCF en Brasil, la mayoría de las cuales se han destinado a implementación de leyes y regulaciones ambientales. Los flujos de financiamiento al Fondo Amazonía están basados en el desempeño a la escala de toda la región amazónica de Brasil, y los contratos con los estados brasileños no están condicionados a las tendencias de deforestación del receptor estatal.

### Otros financiamientos climáticos

Además de los pagos por desempeño, también identificamos los pagos de preparación para REDD+ en 24 de las jurisdicciones estudiadas. Estas inversiones apoyan la planificación y coordinación de estrategias y planes; el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de las instituciones; el desarrollo e implementación de políticas y leyes; la mejora de la medición, reporte, verificación (MRV); el establecimiento de sistemas para la distribución de beneficios; el desarrollo de mecanismos financieros y el lanzamiento de iniciativas piloto y de demostración.

Dos de las jurisdicciones estudiadas (Acre y Tocantins) han obtenido préstamos para apoyar la implementación de estrategias subnacionales de desarrollo sostenible. Dichas inversiones pueden ser amplias e involucrar a múltiples sectores en la economía de la jurisdicción, incluida la agricultura, la silvicultura, la infraestructura y otros que podrían ser relevantes para el desarrollo socioeconómico de cada región específica.

Hasta 2016, 29 de las 39 jurisdicciones estudiadas habían recibido, o estaban programadas para recibir, aproximadamente US\$2.300 mil millones. La mayor parte de este financiamiento (88%) no incluye “cadenas” de reducción de la deforestación. Todas menos 6 de las 29 jurisdicciones habían recibido, o estaban programadas para recibir, al menos US\$10 millones en financiamiento climático de este tipo. El financiamiento climático que no se basa en el desempeño está disponible para la mayoría (82%) de las jurisdicciones a través de los gobiernos nacionales.

Al momento de la publicación de este informe, ~30 de las jurisdicciones estudiadas del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques pronto recibirán entre US\$300 mil y US\$400 mil dólares cada una de los fondos noruegos a través del PNUD para desarrollar o refinar las estrategias jurisdiccionales. Este financiamiento debería conducir a un progreso importante en estas estrategias que, a su vez, debería promover futuras alianzas.

### ALIANZAS EMPRESARIALES-GUBERNAMENTALES PARA PRODUCTOS BÁSICOS SOSTENIBLES

Las “alianzas declaradas” son aquellas en las que una compañía se ha unido formalmente a una estructura de declaración, coalición o gobernanza jurisdiccional, pero aún no ha resultado en un suministro preferencial formal, una inversión financiera o en asistencia técnica a la jurisdicción. Casi la mitad (16) de las jurisdicciones han establecido alianzas “declaradas” a través de estrategias jurisdiccionales individuales (por ejemplo, Mato Grosso PCI, Pará, Kalimantan Occidental, Central y Oriental) o consorcios que involucran múltiples jurisdicciones (cinco gobiernos regionales peruanos a través de la “Coalición Público-Privada por un DRBE”, el Acuerdo Marco para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán

(ASPY) y la Iniciativa de Cacao Forestal de Costa de Marfil). En general, estos acuerdos “blandos” han proporcionado pocos beneficios para las jurisdicciones, aunque eso podría cambiar.

Las “alianzas contraídas” tienen un acuerdo formal que define las responsabilidades y contribuciones de cada parte en la colaboración. Se han establecido alianzas individuales “contraídas” en Mato Grosso (por ejemplo, Carrefour en el municipio de Jurueña), Unilever con distritos en Kalimantan Central, Asia Pulp and Paper en Kalimantan Occidental, y otras en Kalimantan Oriental.

Se está desarrollando una estructura formal para fomentar alianzas empresariales con jurisdicciones a través de los “pilotos de certificación jurisdiccional” de la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) en Kalimantan Central y Sabah.

### ¿LOS COMPROMISOS JURISDICCIONALES ESTÁN VINCULADOS CON LOS COMPROMISOS EMPRESARIALES?

Un pequeño número (5) de alianzas formales y contraídas entre empresas y gobiernos de bosques tropicales se han comprometido a ayudar a encontrar una solución para la deforestación tropical (Fig. 9). Este número es pequeño, en parte, porque el riesgo de ataques por parte de las ONGs de defensa puede ser alto para las empresas que desean establecer estrategias de abastecimiento jurisdiccional, señalando la necesidad de lograr una mejor alineación entre las campañas de las ONGs y la necesidad de alianzas entre jurisdicciones. También hay una diferencia en las métricas de los compromisos. Los gobiernos pueden comprometerse a reducir la deforestación en jurisdicciones enteras, mientras que las empresas se esfuerzan por lograr cadenas de suministro de cero deforestación.

#### RECUADRO 4. DESAFÍO BALIKPAPAN: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DEFORESTACIÓN TROPICAL

Lanzado en la Reunión Anual del GCF de 2017, el Desafío de Balikpapan busca impulsar el avance hacia un objetivo central de la Declaración de Río Branco: reducir la deforestación tropical asociada con la producción agrícola. Adopta un enfoque ascendente que respalda las estrategias jurisdiccionales y las coaliciones regionales que han surgido entre los miembros del GCF, aprovechando las posibles sinergias entre los compromisos empresariales de la cadena de suministro, los sistemas de certificación de sostenibilidad y los programas jurisdiccionales para reducir la deforestación.

El Desafío de Balikpapan ha establecido un Comité Directivo Global para promover un marco general y fomentar la sostenibilidad jurisdiccional que conduce a una “carrera hacia la cima” entre las jurisdicciones que luchan por lograr una deforestación neta cero, comenzando con los miembros del GCF. También asesora estrategias jurisdiccionales y regionales del GCF. El Comité Directivo es convocado por la Secretaría del GCF y Earth Innovation Institute e incluye representantes<sup>28</sup> de procesos de mesas redondas, asociaciones industriales, compañías productoras y minoristas, gobiernos donantes, organizaciones internacionales, gobiernos jurisdiccionales (que representan a los miembros del GCF) y organizaciones filantrópicas.

28 Una lista completa de los representantes y una descripción más detallada del Comité Directivo y su trabajo está disponible en <https://earthinnovation.org/2018/05/balikpapan-challenge-brings-local-governments-together-with-international-experts-to-solve-tropical-deforestation/>



**Tabla 4:** Compromisos y avance alcanzado por jurisdicciones y empresas comprometidas con la desaceleración de la deforestación tropical.

COMPROMISOS Y AVANCE CON RESPECTO A LA DEFORESTACIÓN TROPICAL		
	Jurisdicciones de bosques tropicales	Empresas
Número de compromisos	Declaración de Río Branco (35) Declaración de Nueva York sobre los Bosques (20) Under2 MOU (83)	Compromisos individuales (473) Foro de Bienes de Consumo (~400) NYDF (57)
Compromisos para 2020	Declaración de Río Branco: 80% de reducción de la deforestación para 2020 si las alianzas corporativas y el financiamiento son suficientes	155 (33%) de 473 empresas establecieron compromisos para 2020 relacionados a la cadena de suministro <sup>29</sup>
Métrica de deforestación	Reducciones regional en la deforestación (% de reducción por debajo del promedio histórico)	Cero deforestación en las cadenas de suministro
Avance en la deforestación	La deforestación disminuyó en 20 de las 35 jurisdicciones de RBD, y en >50% en 7 de éstas	49 de 473 compromisos empresariales (10%) con >75% de cumplimiento respecto a las promesas para 2020
Avance en las emisiones de carbono	6,77 GtCO <sub>2</sub> e (emisiones evitadas) <sup>30</sup>	N/A
% del área global de bosque tropical	28% (Declaración de Río Branco)	N/A
Productos básicos	Todos los producidos en una jurisdicción	Soja, aceite de palma, carne de res, madera, pulpa

### RECUADRO 5. ALIANZAS LOCALES A GLOBALES: PUEBLOS INDÍGENAS, COMUNIDADES LOCALES Y GOBIERNOS SUBNACIONALES

Los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y otras comunidades dependientes de los bosques son socios importantes en la lucha para frenar el cambio climático. Poseen o tienen derechos de uso designados para aproximadamente el 18% de los bosques tropicales del mundo y mantienen el 20% del carbono total aéreo almacenado en las principales regiones de bosques tropicales del mundo (Indonesia, República Democrática del Congo, Mesoamérica, cuenca amazónica). Los gobiernos subnacionales han reconocido cada vez más el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el cumplimiento de compromisos para detener la deforestación.

En 2014, los miembros del GCF firmaron la Declaración de Río Branco, comprometiéndose a reducir la deforestación en un 80% para 2020 y a distribuir los beneficios de dichos esfuerzos con los pueblos indígenas y las comunidades locales. El Comité Global del GCF sobre Pueblos Indígenas y Comunidades Locales<sup>31</sup> se formó en 2016 con el objetivo general de fortalecer las alianzas entre los gobiernos subnacionales y los pueblos indígenas y las comunidades locales para ayudar a poner en práctica la Declaración de Río Branco. El Comité Global está promoviendo alianzas entre gobiernos, pueblos indígenas y comunidades locales mediante la creación de una plataforma para el diálogo a nivel global, nacional y regional. También sirve para informar y guiar las alianzas estableciendo los “Principios de Colaboración” y para replicar y adaptar modelos de éxito a través de intercambios de aprendizaje.

La sostenibilidad jurisdiccional puede respaldar los avances en términos de garantizar los derechos sobre la tierra, el reconocimiento político (integración de los pueblos indígenas en la toma de decisiones), el desarrollo económico para sustentar los medios de vida, el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de liderazgo para apoyar la autodeterminación, el involucramiento y el reconocimiento cultural, que son fundamentales para construir sociedades sostenibles y equitativas. Algunos ejemplos de lo que estos tipos de alianzas pueden lograr incluyen:

- Desarrollo económico: la Asamblea de Pueblos Indígenas de Papúa Occidental y el gobierno provincial trabajan juntos para garantizar los derechos de las comunidades locales a manejar sus propios bosques y para crear incentivos para la gestión de los bosques.
- Reconocimiento político: en jurisdicciones como Acre, Quintana Roo, Mato Grosso, Papúa Occidental y Kalimantan Central, los pueblos indígenas tienen o están desempeñando roles más prominentes en la toma de decisiones y cuentan con un reconocimiento político más amplio.
- Desarrollo de capacidades: en Acre, un programa de capacitación para agentes de extensión comunitaria se convirtió en una plataforma y un catalizador para el involucramiento de los pueblos indígenas en el desarrollo sostenible dentro de sus territorios y comunidades<sup>32</sup>.

29 Stephen Donofrio y el equipo de “Cadena de Suministro” en Forest Trends. [supply-change.org](https://supply-change.org)

30 No todas estas reducciones se pueden atribuir a acciones de la propia jurisdicción; muchas involucraron intervenciones nacionales y no gubernamentales.

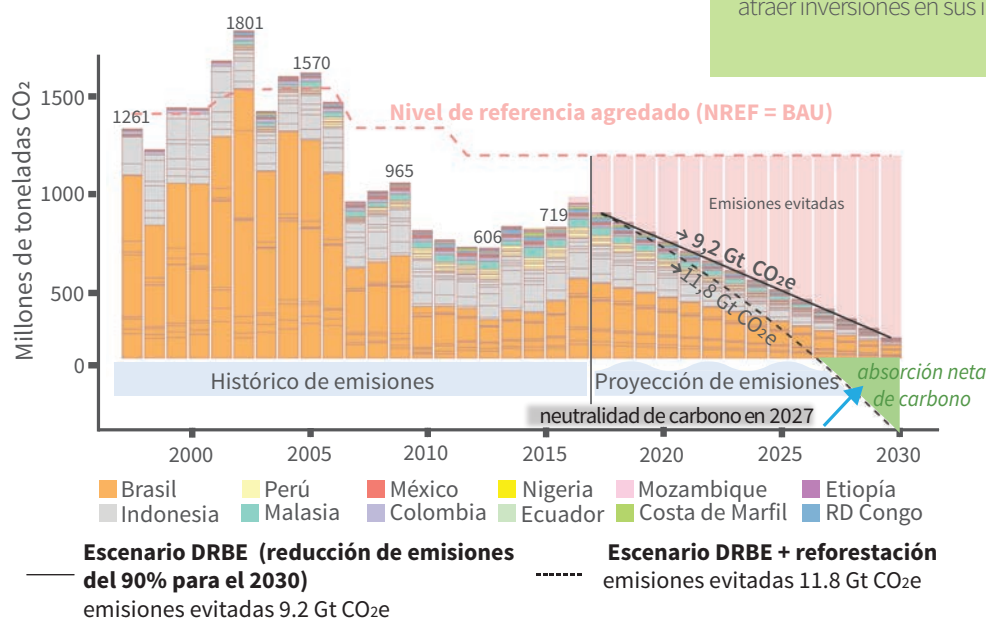
31 Una descripción más detallada del Comité Global y su trabajo está disponible en <https://earthinnovation.org/publications/the-governors-climate-and-forests-task-force-global-committee-for-indigenous-peoples-local-communities/>

32 M. DiGiano *et al.* 2018. “The Twenty-year-old Partnership between Indigenous Peoples and the Government of Acre, Brazil”. Disponible en <https://earthinnovation.org/publications/the-twenty-year-old-partnership-between-indigenous-peoples-and-the-government-of-acre-brazil/>

## 5. UNA VISIÓN AL FUTURO: IMPACTOS POTENCIALES

Para evaluar los impactos potenciales que podrían ocurrir si las 39 jurisdicciones cumplen con sus compromisos para reducir la deforestación y acelerar la recuperación del bosque, examinamos 3 escenarios alternativos basados en diferentes suposiciones centrales (Fig. 10).

- **Escenario BAU (business-as-usual)** proyectado usando la tendencia y el período de deforestación representados por cada NREF. Las subdivisiones de barra representan contribuciones jurisdiccionales dentro de un país. Este escenario proyecta emisiones probables si las jurisdicciones siguen un escenario como de business-as-usual siguiendo las tendencias históricas de deforestación.
- **Escenario de DRBE** proyectado con una reducción de la deforestación del 90% para 2030 en relación con el NREF. Este escenario implica que las jurisdicciones deben seguir un camino de reducción acelerada de la deforestación para lograr una reducción del 90% de las emisiones para 2030. Este escenario es ambicioso, pero no inviable. Las jurisdicciones brasileñas ya han reducido la deforestación en un 60% con respecto a su NREF en los últimos 5 años.
- **Escenario de cero deforestación neta** considera una reducción del 90% en la deforestación más la regeneración natural o inducida de áreas forestales degradadas y deforestadas sobre la base de compromisos nacionales o subnacionales reducidos. El área de regeneración forestal alcanzaría los 9,4 Mha en 2030. En los 14 años simulados (2017-2030) los bosques regenerados alcanzan 1/5 de las reservas de carbono proyectadas. El carbono incrementa linealmente desde el año 1 hasta el año 14 y el total de reservas de carbono incrementa de acuerdo a la distribución ponderada de la edad y el área del bosque durante cada año.



**Figura 10:** Bajo un escenario de DRBE, estimamos que en conjunto las 39 jurisdicciones podrían evitar un total de 9,2 Gt CO<sub>2</sub>e entre 2017 y 2030 mediante la reducción de su deforestación en un 90% de los niveles históricos de referencia de emisiones forestales. Además, bajo un aumento de carbono, escenario de “cero deforestación neta” (la regeneración natural e inducida por el hombre de los bosques deforestados y degradados compensan las pérdidas de bosques), la neutralidad del carbono podría lograrse para el 2027 con una absorción neta de carbono que llegaría a 0,4 Gt CO<sub>2</sub>e por año para 2030 y emisiones totales evitadas de 11,8 Gt CO<sub>2</sub>e.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Emisiones observadas para el período 1990-2017 derivadas de datos de deforestación anuales jurisdiccionales y factores de emisiones de carbono según han sido definidos por el NREF nacional presentado a la CMNUCC. Las reservas de carbono incluidas son: biomasa aérea, biomasa subterránea, degradación de la turba, suelo y hojarasca tal como se define en cada NREF. La regeneración de los objetivos forestales se basa en compromisos de reforestación subnacionales/nacionales y una deforestación neta cero. La asignación de regeneración de cada jurisdicción se distribuye uniformemente entre 2017 y 2030.

### RECUADRO 6. GCFIMPACT.ORG Y SUS SUCESORES: FACILITAR ALIANZAS CON JURISDICCIONES DE BOSQUES TROPICALES

La transición a la sostenibilidad jurisdiccional en las regiones de bosques tropicales podría verse facilitada si las innovaciones en políticas y programas públicos y las mejoras en la facilidad para hacer negocios fomentan nuevas inversiones en empresas sostenibles. La información sobre estas innovaciones no es fácil de encontrar. La plataforma en línea GCFImpact.org se desarrolló en respuesta a esta necesidad.

GCFImpact.org actualmente proporciona información sobre tendencias de deforestación, reducciones de emisiones de carbono, producción de 60 productos agrícolas, desempeño económico, políticas públicas, programas y compromisos, así como la facilidad para hacer negocios, en 55 jurisdicciones de bosques tropicales ubicadas en 8 países. Complementa a la Base de Datos de Conocimiento del GCF, el registro oficial en línea de información crítica sobre las jurisdicciones miembros del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques.

GCFImpact.org es solo el primer paso para facilitar alianzas estratégicas. Algunas jurisdicciones del GCF han desarrollado sus propias plataformas hechas a medida. Acreppp.org (para Acre, Brasil) y pcimonitor.org (para la Estrategia PCI de Mato Grosso) son dos ejemplos de sistemas de información jurisdiccionales que surgieron de diálogos entre múltiples actores para facilitar el fácil acceso a información confiable sobre el avance hacia los objetivos y la visión global del futuro de cada región. Estos sistemas también son una declaración de intenciones de los estados tropicales, que especifican los compromisos y el avance logrado en la conservación de sus ecosistemas y en el logro de un desarrollo socialmente inclusivo. En el caso de Acre, su plataforma también está diseñada para atraer inversiones en sus industrias bajas en carbono.

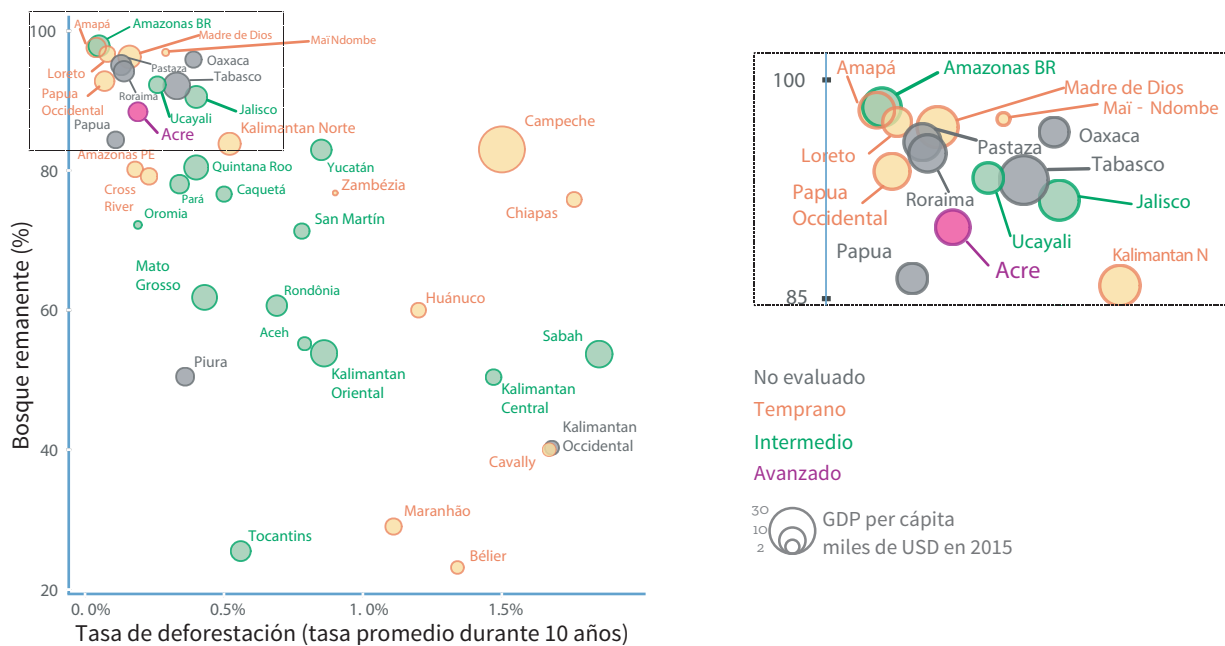




## ¿CUÁL ES EL CAMINO QUE DEBEN SEGUIR LAS JURISDICCIONES PARA ALCANZAR LA DEFORESTACIÓN NETA CERO?

El potencial de una transición a gran escala hacia una deforestación neta cero varía enormemente según la jurisdicción, dependiendo del equilibrio entre agricultura y bosques a las que se enfrenta cada región, y su disposición para implementar estrategias que impliquen reducir la deforestación y acelerar la recuperación forestal. La recuperación/restauración forestal es más fácil de promover donde hay una abundancia de tierras deforestadas con bajos niveles de productividad agrícola. En ausencia de un camino claro para el crecimiento de la

producción agrícola, la posibilidad de permitir que la tierra marginal vuelva a ser bosque o de restaurar activamente el bosque es bastante pequeña. Muchas de las jurisdicciones estudiadas han alcanzado niveles intermedios o altos de avance hacia el DRBE y conservan un 60-90% de su bosque original (Fig.11), por lo que, podrían ser buenas candidatas para alcanzar una deforestación neta cero en el corto plazo.



**Figura 11:** Las jurisdicciones se muestran según su cobertura forestal restante (como porcentaje del área original de bosque) y la tasa anual de deforestación (promediada en los últimos 10 años). El tamaño del círculo indica el PIB per cápita de cada jurisdicción. Además, se indica la calificación del avance promedio de cada jurisdicción.

## DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Las jurisdicciones subnacionales enfrentan una amplia gama de barreras para promover estrategias de desarrollo bajo en emisiones. Al mismo tiempo, existen importantes oportunidades para avanzar hacia la sostenibilidad

### DESAFÍOS

- La autonomía administrativa y legal de los gobiernos subnacionales varía mucho de una nación a otra y es bastante limitada en algunas regiones
- Existen tensiones de poder complejas y de larga data sobre el territorio entre sectores con prioridades conflictivas
- La baja capacidad técnica y el insuficiente financiamiento impiden la implementación de planes de acción jurisdiccionales completos
- Los problemas complejos de los derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra a menudo no son abordados a pesar de las importantes alianzas que surgen entre los pueblos indígenas/comunidades locales y los gobiernos
- La alineación insuficiente de las actividades del sector privado con las agendas de política relevantes resulta en oportunidades perdidas para fortalecer la gobernanza de manera más amplia
- Los escasos incentivos (incluido el acceso limitado a los mercados) para los productos básicos obtenidos de forma sostenible, en parte porque estas cadenas de valor están subdesarrolladas

jurisdiccional a pesar de estas barreras. A continuación, resumimos algunos de los desafíos y oportunidades más comunes identificados en las 33 jurisdicciones estudiadas.

### OPORTUNIDADES

- Varias jurisdicciones subnacionales tienen una capacidad significativa para probar, adaptar e implementar políticas y programas que pueden ser adoptados por los gobiernos nacionales o replicados en otras regiones
- La mayoría de las jurisdicciones estudiadas ya está desarrollando marcos institucionales para estrategias integradas de DRBE para superar las luchas históricas por el poder
- La mayor cantidad y variedad de canales de medios/publicidad permiten que las jurisdicciones den a conocer su avance e iniciativas a posibles donantes e inversionistas
- Incluso pequeñas cantidades de nuevo financiamiento pueden revitalizar los procesos que ya están en marcha y brindar apoyo para probar políticas e incentivos innovadores
- Las iniciativas piloto intermunicipales y locales demuestran el potencial de escalar las actividades a toda la jurisdicción

- 
- 23 jurisdicciones en el estudio han tenido o tienen próximas elecciones este año. Las elecciones pueden presentar un desafío o una oportunidad, según el contexto de cada jurisdicción y las prioridades políticas y la capacidad de la administración entrante
- 

## RESULTADOS CLAVE

- Las 39 jurisdicciones estudiadas abarcan el 28% de los bosques tropicales del mundo y representan una amplia gama de tasas de deforestación y fracciones del bosque original que aún conservan
- Casi todas las jurisdicciones (38 de 39) han asumido compromisos formales para frenar la deforestación y/o acelerar la reforestación/recuperación forestal
- Muchas están financiando e implementando políticas y programas innovadores, incluyendo incentivos, y dando prioridad a los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pequeños agricultores como beneficiarios clave de estas intervenciones
- La deforestación ha disminuido en la mitad de las jurisdicciones (19 de 39) por debajo de los niveles subnacionales de referencia proyectados
- Estas disminuciones en la deforestación representan aproximadamente 6,77 GtCO<sub>2</sub>e de emisiones de carbono evitadas, atribuibles tanto a intervenciones de políticas nacionales y subnacionales como a acciones del sector privado
- Considerando 9 elementos básicos de estrategias exitosas de desarrollo bajo en emisiones en 33 jurisdicciones, una jurisdicción se encuentra en un nivel de avance “Avanzado”, 16 en “Intermedio” y 15 en “Temprano”; todas estas jurisdicciones merecen reconocimiento y apoyo

- Los elementos con más avance en todas las jurisdicciones son el desarrollo de planes espaciales y las plataformas de gobernanza de múltiples actores, con menos progreso en el desarrollo de sistemas de MRV robustos, transparentes y accesibles, el establecimiento del apoyo político, técnico y financiero para la transición hacia la agricultura sostenible y en asegurar el financiamiento necesario para estrategias de desarrollo bajo en emisiones
- Aunque casi la mitad de las jurisdicciones (14 de 33) han logrado algún avance relacionado con la producción agrícola sostenible, sorprendentemente sólo algunas (5) han celebrado acuerdos formales de abastecimiento de productos básicos con empresas que contribuyen directamente a través de financiamiento, asistencia técnica u otros medios; la mayoría (16 de 39) tiene alianzas “declaradas” a través de consorcios y diálogos multisectoriales
- Los estándares actuales y los sistemas de calificación para jurisdicciones generalmente establecen altos requerimientos de desempeño jurisdiccional que podría hacer que las jurisdicciones se muestren con bajos niveles de capacidad de gobierno y sin los socios necesarios; también se necesita un enfoque más flexible para construir credibilidad
- El 58% de las jurisdicciones (23 de 39) han recibido más de US\$10 millones en financiamiento climático, pero la mayoría de estos fondos no tienen vínculos formales con el desempeño en la reducción de emisiones; una jurisdicción ha recibido financiamiento basado en el



desempeño directamente y tres más están esperando recibir financiamiento

- Si todas las jurisdicciones estudiadas adoptaran metas de deforestación neta cero para 2030, integrando las metas para frenar la deforestación con las metas de recuperación y restauración de bosques naturales en tierras deforestadas, se evitarían aproximadamente 12 GtCO<sub>2</sub>e para 2030
- La deforestación neta cero en toda la jurisdicción es el escenario más probable para lograr la meta del NYDF para 2030 de terminar con la deforestación tropical

## RECOMENDACIONES

Un desafío crítico para la comunidad global es la creación de las condiciones habilitantes que alienten a las jurisdicciones subnacionales a avanzar tanto y tan rápido como sea posible a pesar de las limitaciones sustanciales asociadas con la magnitud del cambio socioeconómico y político que debe producirse para que ocurran los cambios propuestos. A continuación, proporcionamos un breve conjunto de recomendaciones:

- Establecer condiciones habilitantes globales para fomentar más alianzas entre empresas y el gobierno
  - » Un marco global simple para registrar, reconocer y vincular jurisdicciones aspirantes a socios potenciales del sector privado podría ayudar a evitar los problemas que enfrenta la certificación de productos básicos, en la que solo los productores/fábricas con mejores resultados son certificados.
  - » Ajustar las estrategias de campaña de defensa del medio ambiente para favorecer las alianzas significativas entre las empresas y el gobierno
  - » Promover alianzas que incluyan las prioridades de los gobiernos de la región productora, tal como se describe en el borrador del Marco Jurisdiccional de Balikpapan
- Apoyar las jurisdicciones de los bosques tropicales para superar las limitaciones fundamentales en emprendimientos e inversiones de empresas sostenibles
  - » Mejorar la facilidad para hacer negocios y reducir el riesgo para los inversionistas mediante la optimización de los procesos regulatorios, el incremento de la claridad regulatoria, el aumento de la transparencia y la inversión en infraestructura verde, un esfuerzo a largo plazo
- Aprovechar las emisiones evitadas verificadas
  - » Movilizar reducciones de emisiones verificadas, tanto existentes como proyectadas, para crear nuevas oportunidades comerciales: productos básicos con carbono neutro; fondos verdes; fondos de tenencia de la tierra; establecimiento de asistencia técnica
- Difundir el reconocimiento de los derechos humanos y de la tierra mediante enfoques jurisdiccionales para la consulta y la

**Cita** | CM Stickler, AE Duchelle, JP Ardila, DC Nepstad, OR David, C Chan, JG Rojas, R Vargas, TP Bezerra, L Pritchard, J Simmonds, JC Durbin, G Simonet, S Peteru, M Komalasari, ML DiGiano, MW Warren. 2018. El Estado de la Sostenibilidad Jurisdiccional. San Francisco, USA: Earth Innovation Institute/Bogor, Indonesia: Centro para la Investigación Forestal Internacional/Boulder, USA: Secretaría del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques. <https://earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability/?lang=es>

distribución de beneficios

- » Aprovechar los requisitos de “salvaguardas” del financiamiento climático para impulsar mejores mecanismos de consulta y distribución de beneficios
- » Apoyar las alianzas entre el gobierno y los pueblos indígenas/comunidades, siguiendo el ejemplo de Acre y los principios del GCF

## CONCLUSIONES

Diez años después de la creación del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques, una porción sorprendentemente grande de los bosques tropicales del mundo se ubica en geografías políticas (estados, provincias, gobiernos regionales y departamentos) que están avanzando en el establecimiento de estrategias, políticas y programas para lograr el desarrollo rural bajo en emisiones. Este avance es notable dados los mecanismos precarios existentes para reconocer, financiar y recompensar este progreso. El escenario está listo para aumentar la escala de resultados logrados en la desaceleración de la deforestación y la degradación de los bosques a medida que se acelera la recuperación y restauración de los bosques. El reconocimiento y la protección de los derechos sobre la tierra, el apoyo adecuado para los medios de vida y la participación en los procesos de planificación de los pueblos indígenas y otras comunidades forestales son dimensiones integrales de estos resultados.

Para que las jurisdicciones estudiadas tengan éxito y para que sus experiencias se emulen en otras jurisdicciones, será esencial contar con un alineamiento de fuerzas a corto plazo. Para que las alianzas entre las empresas y el gobierno prosperen, la defensa del medio ambiente debe evolucionar para reconocer y favorecer dichas alianzas. Los gobiernos necesitan ayuda y asesoramiento para hacer que sus jurisdicciones sean “financiables” y se conviertan en lugares cada vez más atractivos para hacer negocios, creando una menor dependencia de la financiación climática internacional. Las jurisdicciones pueden ejercer presión sobre sus gobiernos nacionales y procesos internacionales para permitir el uso creativo de reducciones de emisiones verificadas, cuyos volúmenes deberían aumentar enormemente, para maximizar su utilidad en impulsar transiciones regionales hacia el desarrollo rural bajo en emisiones.

